

DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

RESOLUCIÓN NÚMERO ST-1658 DE 10 DE OCT 2025

“Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

EL SUBDIRECTOR TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias en especial, las conferidas en el artículo 16 A del numeral 1 del Decreto 2353 de 2019 y la Resolución No. 0038 de 15 de enero de 2025 y Acta de Posesión del 23 de enero de 2025 y,

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto Ley 2893 de 2011, modificado por los Decretos 1140 de 2018 y 2353 de 2019, se modificaron los objetivos, la estructura orgánica y funciones del Ministerio del Interior y se integra el Sector Administrativo del Interior.

Que mediante el Decreto 2353 de 2019, se creó la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, y las Subdirecciones Técnica de Consulta Previa, de Gestión de Consulta Previa y Corporativa.

Que el numeral 1º del artículo 16 A del citado decreto, le asignó a la Subdirección Técnica de Consulta Previa de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, la función de *“Determinar la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras, o actividades, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran”*.

Que, en consideración con los antecedentes normativos descritos, por medio del presente acto administrativo, se procederá a desarrollar el análisis en virtud del recurso de reposición y en subsidio de apelación interpuesto contra la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.

1. ANTECEDENTES.

1.1 Que mediante el radicado **2024-1-004044-045188 - ID 347747** del 13 de junio de 2024, la señora DIANA SOFIA DALLOS DUARTE, identificada con cédula de ciudadanía No. 37.721.800, en calidad de Apoderada General de la empresa AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA LIMITADA, en el marco de la debida diligencia con respecto a al Consejo Comunitario Afroverde, solicitó a esta Dirección se pronuncie sobre la procedencia de la consulta previa para el proyecto: **“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA GLOBAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION 2531 DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0107 DE 2011, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0513 DE 2015; EN EL SENTIDO NORTE DEL BLOQUE PLATANILLO E INCLUIR OTRA ACTIVIDADES”**, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo.

1.2 La Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior mediante el oficio con radicado **2024-2-002410-032870 Id: 366039** del 12 de julio de 2024, informó a la señora Catalina Zafra Botero, Apoderada General de la empresa AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA LIMITADA la necesidad de visita de verificación al Consejo Comunitario Afroverde en el marco del proyecto **“ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PLATANILLO”**.

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

- 1.3 Que, mediante oficio Radicado 2024-2-002410-052096 Id: 419950 del 4 de octubre de 2024 se remitió a la representante del Consejo Comunitario Afro Verde y demás partes involucradas, convocatoria visita de verificación los días 17 al 19 de octubre, ubicado en zona rural del municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo, en el marco del proyecto: “**ÁREA DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PLATANILLO**”, ubicado en jurisdicción del municipio de puerto Asís, departamento del Putumayo.
- 1.4 En ocasión de dicho análisis, la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Consulta Previa expidió la Resolución N° ST – 0999 de 14 de julio de 2025 “Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para el proyecto “**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA GLOBAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION 2531 DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0107 DE 2011, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0513 DE 2015; EN EL SENTIDO NORTE DEL BLOQUE PLATANILLO E INCLUIR OTRA ACTIVIDADES**”, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo” en la cual resolvió:

“(…)

PRIMERO. Que **no procede** la consulta previa con el Consejo Comunitario Afroverde, para el proyecto: “**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA GLOBAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION 2531 DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0107 DE 2011, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0513 DE 2015; EN EL SENTIDO NORTE DEL BLOQUE PLATANILLO E INCLUIR OTRA ACTIVIDADES**”, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

SEGUNDO. Que la información sobre la cual se expide la presente resolución aplica específicamente para las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante mediante el oficio con radicado 2024-1-004044-045188 - ID 347747 del 13 de junio de 2024, para el proyecto: “**ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA GLOBAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION 2531 DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0107 DE 2011, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0513 DE 2015; EN EL SENTIDO NORTE DEL BLOQUE PLATANILLO E INCLUIR OTRA ACTIVIDADES**”, localizado en jurisdicción del municipio de Puerto Asís, en el departamento de Putumayo, identificado con las coordenadas referidas en la parte considerativa del presente acto administrativo.

(…)”

- 1.5 Dicha resolución fue debidamente notificada el 15 de julio de 2025, mediante correo electrónico a los siguientes actores: co.correspondencia@geo-park.com, jadiaz@geo-park.com, Mrojas@geo-park.com, anapatriciajulio3016@gmail.com
- 1.6 Mediante radicado externo ControlDoc 2025-1-002410-058906 Id Control: 580392 del 23 de julio de 2025, la señora ANA PATRICIA JULIO GORDO en calidad de Representante Legal CONSEJO COMUNITARIO AFRO VERDE, elevó recurso de reposición y en subsidio de apelación solicitando reponer la decisión adoptada mediante la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025 que resolvió sobre la procedencia o no de la consulta previa con el **Consejo Comunitario Afro Verde**, sobre el proyecto arriba mencionado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURRENTE.

En su motivación, expone el ciudadano lo siguiente:

“(…)”



Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

La Resolución impugnada concluye que no hay afectación directa al Consejo Comunitario Afroverde por parte del proyecto de modificación de la Licencia Global del Bloque Platanillo, y por ende, no procede el derecho a la consulta previa. Esta conclusión omite considerar elementos esenciales del contexto socio territorial, espiritual, cultural y jurídico, y se aparta de los estándares nacionales e internacionales que regulan el derecho a la consulta previa. Durante la visita de campo realizada por la Dirección Técnica entre el 17 y 19 de octubre de 2024, se constató la presencia efectiva y viva del Consejo Afroverde dentro del área de influencia del proyecto. Se realizaron talleres, entrevistas, ejercicios de cartografía social y recorridos participativos que dejaron claro que:

- *Existen viviendas, cultivos y fuentes de agua utilizadas por la comunidad dentro del polígono del proyecto.*
- *Hay caminos tradicionales que comunican las veredas y que son usados para fines culturales, espirituales y económicos.*
- *Se identificaron zonas utilizadas para rituales de sanación, armonización espiritual, recolección de plantas medicinales y encuentros colectivos.*

Pese a esta constatación, la Resolución desestima esta información, otorga mayor valor a los documentos presentados por la empresa proponente y aplica un criterio técnico restrictivo que desconoce el enfoque diferencial que debe guiar las decisiones del Estado frente a comunidades étnicas.

La Resolución ST-0999 del 14 de julio de 2025 es el resultado de un análisis técnico y jurídico que, lamentablemente, desconoce la realidad viva y compleja del Consejo Comunitario Afroverde. A pesar de haberse constatado la presencia de integrantes de la comunidad en el área de influencia del proyecto, y de haberse identificado elementos tangibles e intangibles de su territorialidad, la Resolución concluye que no hay lugar a consulta previa, basándose en una interpretación fragmentaria, restrictiva y descontextualizada del principio de “afectación directa”.

Durante la visita de campo realizada entre el 17 y el 19 de octubre de 2024, funcionarios del Ministerio recogieron testimonios, participaron en talleres comunitarios, caminaron con los mayores los caminos tradicionales y presenciaron directamente las viviendas, cultivos, fuentes de agua y espacios de uso ritual dentro del polígono del proyecto petrolero. Sin embargo, en lugar de asumir esta información como indicio suficiente para activar la garantía de la consulta previa —como lo exige el principio de precaución y el enfoque diferencial—, la autoridad la descartó, priorizando los informes cartográficos de la empresa proponente.

Esto configura una vulneración al derecho a la participación informada, pues la comunidad fue escuchada formalmente, pero su palabra fue deslegitimada frente al peso de la técnica institucional. Se incumplió el deber de interpretación intercultural, que exige valorar el conocimiento propio y los métodos de identificación territorial de los pueblos étnicos (cartografía social, mapas hablados, calendarios culturales, etc.).

Además, la Resolución ignora los impactos acumulados de décadas de actividad extractiva en la zona: contaminación de fuentes hídricas, desplazamiento de fauna, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales, desconfianza institucional, criminalización del liderazgo afro y afectaciones profundas a la autonomía comunitaria.

Lo más grave es que se toma una decisión definitiva sin aplicar el principio de precaución, sin considerar que cualquier duda debe resolverse en favor del grupo étnico y sin activar las salvaguardas que ordena el Convenio 169 de la OIT y la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional.

V. AFECTACIONES ESPIRITUALES, SOCIALES Y ECONÓMICAS *El paso de maquinaria, los derrames, la modificación del paisaje sonoro y visual, y el cierre o militarización de caminos rompen ese equilibrio espiritual. Esto no es un argumento simbólico: es un daño cultural concreto, que según la Corte Constitucional (T-769/09, SU383/03), equivale a una forma de desplazamiento espiritual y simbólico.*

La economía de la comunidad se basa en:

- *Cultivo tradicional de pancoger.*

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

- *Recolección de frutos y leña.*
- *Pesca en quebradas limpias.*
- *Trabajo en minga, ventas solidarias, trueque cultural.*

La actividad petrolera afecta: • *Las fuentes de agua de las que depende la agricultura.*

- *El acceso a caminos rurales para transportar cosechas.*
- *El equilibrio de los ciclos agrícolas por contaminación y vibración.*
- *El miedo a sembrar cerca de áreas restringidas.*

En lo organizativo:

- *Se ha fragmentado la comunidad por la imposición de límites.*
- *Hay miedo de reunirse por temor a ser malinterpretados como opositores.*
- *Se debilita el liderazgo tradicional cuando el Estado deslegitima su palabra.*
- *Al no ser registrados, argumento que la empresa ha señalado y sostenido en diferentes espacios, discriminan a la comunidad para la participación de cupos laborales en la empresa.*

(...)”

3. PETICIÓN DEL RECURRENTE

Sobre el asunto el recurrente solicitó:

“(...)”

- 1. Solicito que se revoque en su totalidad la Resolución ST-0999 de 2025, por haberse adoptado desconociendo la presencia efectiva, cultural, espiritual y territorial del Consejo Comunitario Afroverde, así como los estándares de garantía constitucional e internacional que rigen la consulta previa.*
- 2. Que se ordene a la Dirección de Consulta Previa iniciar de inmediato el proceso de consulta previa con nuestra comunidad, bajo metodologías adecuadas, con garantías de buena fe, acompañamiento institucional y con respeto por nuestros tiempos y formas de deliberación.*
- 3. En subsidio, que se conceda el recurso de apelación para que sea resuelto por la instancia superior, conforme a derecho y garantizando el principio de participación efectiva de los pueblos étnicos.*

”

4. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

4.1. COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

La Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, actúa de conformidad con la Carta Política de 1991, que consagró el reconocimiento y la especial protección de la diversidad étnica y cultural en el país, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptado en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley 21 de 1991, conformando el bloque de constitucionalidad.

De conformidad con lo anterior, la consulta previa surge como un derecho constitucional, mediante el cual el Estado garantiza a las comunidades étnicas afectadas por un proyecto, obra o actividad (en adelante POA), medida legislativa o administrativa, la participación previa, libre e informada sobre el proyecto o medida que se pretenda realizar, buscando que de manera conjunta y participativa se identifiquen los posibles impactos que estos puedan generar, con el fin de salvaguardar la idiosincrasia de las comunidades étnicas que habitan en el país.



Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

Para dar cumplimiento a lo antes señalado encontramos como marco normativo:

1. El Decreto 2353 de 2019, crea dentro de la estructura del Ministerio del Interior la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, convirtiéndola en garante dentro del Desarrollo del proceso de consulta previa, con la misión de atender entre otras tareas, la de impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas.
2. Específicamente el artículo 4 que modificó el artículo 16 del Decreto 2893 de 2011, modificado por el Decreto 1140 de 2018, que señala las funciones de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior:

“1. Impartir los lineamientos para la determinación de la procedencia de la consulta previa para la expedición de medidas legislativas o administrativas o la ejecución de proyectos, obras o actividades, que puedan afectar directamente a comunidades étnicas”.

Es así como dentro de la competencia fijada por la ley a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se pueden resumir entre otras en: i) La determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa; y en ii) Dirigir y coordinar los procesos de consulta previa. Se trata entonces, de competencias que han sido fijadas de manera única y exclusiva a esta Dirección del Ministerio del Interior, sin que otra autoridad administrativa tenga competencia para ello.

4.2. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

El recurso de reposición constituye un instrumento legal mediante el cual la parte interesada tiene la oportunidad de ejercer el derecho de controvertir una decisión de la administración, para que la administración previa evaluación, confirme, aclare, modifique, adicione o revoque la decisión. Es decir que el funcionario que tomó la decisión administrativa tendrá la oportunidad para enmendar o corregir un error que se haya presentado en el acto administrativo.

En el capítulo VI de la Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, se establecen las normas para la presentación, oportunidad y trámite de los recursos de reposición contra los actos administrativos.

Los recursos contra los actos administrativos se encuentran reglados en la Ley 1437 de 2011, así: “Artículo 74. Recursos contra los actos administrativos. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos: 1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque”. La oportunidad y presentación del recurso de reposición se encuentra en el artículo 76 del mismo Código, así:

“Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión (...)”

Además del plazo para el ejercicio de los recursos, el artículo 77 del precitado Código fija los requisitos que deben cumplir para su interposición con el siguiente texto:

“Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos:

- 1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.*
- 2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.*
- 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.*
- 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este medio. Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados.*

Si la recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de dos (2) meses.

Si no hay ratificación se hará efectiva la caución y se archivará el expediente. Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recurrido le exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber”.

4.3. REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES DEL ESCRITO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO:

Así las cosas, en relación con los requisitos formales del escrito de recurso de reposición que deben observarse, en el presente caso se puede concluir lo siguiente:

- a. El recurso se interpuso por escrito y está dirigido a la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.
- c. La recurrente radicó el recurso de reposición en subsidio de apelación, y expone la inconformidad en la decisión emitida.
- d. Teniendo en cuenta que el recurso de reposición y en subsidio de apelación fue presentado por el señor Ana Patricia Julio Gordo, en calidad de representante legal del Consejo Comunitario Afro Verde, esta Subdirección reconoce que el recurso ha sido presentado por la persona legitimada para este efecto.
- e. Por último, el recurrente indicó la dirección electrónica de notificación donde este Despacho puede notificar la presente decisión, a saber: anapatriciajulio3016@gmail.com

5. FUNDAMENTOS PARA RESOLVER EL RECURSO DE REPOSICIÓN

5.1. PROBLEMA JURÍDICO

Corresponde, entonces, a este Despacho analizar la situación planteada por la recurrente, cuando indica que el análisis técnico realizado por esta Autoridad, al desconocer la presencia efectiva, cultural, espiritual y territorial del Consejo Comunitario Afroverde, así como los estándares de garantía constitucional e internacional que rigen la consulta previa.

5.2. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PARA RESOLVER

5.2.1. SOBRE LA OMISIÓN DE ELEMENTOS ESENCIALES

Es menester de esta Autoridad controvertir lo planteado por usted, cuando asegura, que el análisis plasmado en la resolución objeto de recurso omite elementos esenciales del contexto socio territorial, espiritual, cultural y jurídico, apartando el resultado de los estándares nacionales e internacionales que regulan el derecho a la consulta previa.

Así las cosas, pasaremos a desvirtuar su posición, con base al análisis realizado a cada uno de los elementos mencionados por usted, a saber:

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

- **SOCIO-TERRITORIAL**

“y tal como se ha evidenciado a lo largo del documento, previo a 2022 no es posible vislumbrar elementos cohesionadores en las familias que hoy componen el Consejo Comunitario, pues las mismas estaban inmersas en dinámicas organizativas veredales, lo que podría entenderse como que previo a 2022 no es posible entender la existencia de una estructura colectiva cohesionada culturalmente. Esto se reafirma en el relato de los comuneros respecto a la conformación del Consejo Comunitario, donde se afirma que la iniciativa de conformación de este surgió de una voluntad individual, y que, si bien luego tuvo recepción de varias familias, no fue un proceso que surgió de una voluntad colectiva que tradicionalmente expresara su sentido comunitario y que desembocó en un proceso organizativo.”

En este caso, si bien el Consejo Comunitario Afroverde se reconoce actualmente como una organización étnica de carácter colectivo, no es posible identificar un proceso organizativo con identidad étnica consolidada previo al año 2022. Tal como se expone en el análisis realizado, la conformación del Consejo tuvo como propósito fundamental la visibilización de un conjunto de familias ante actores privados y ante la administración municipal, en una lógica más asociada a la organización veredal propia del contexto territorial, que a una dinámica étnica consolidada o ancestral.

En este sentido, es de recordar que el proyecto comenzó sus trámites administrativos mediante el radicado **EXTMI17-34786** del 04 de agosto de 2017, donde la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior del Interior expidió la **Certificación Número 0866** de 16 de agosto de 2017, para el proyecto **“ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA MODIFICACION DE LA LICENCIA GLOBAL OTORGADA MEDIANTE RESOLUCION 2531 DE 2009, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0107 DE 2011, MODIFICADA POR LA RESOLUCION 0513 DE 2015; EN EL SENTIDO NORTE DEL BLOQUE PLATANILLO E INCLUIR OTRA ACTIVIDADES”**

Por lo tanto, al momento en que se formuló el POA, no existía una estructura organizativa étnica constituida ni un proceso comunitario que permitiera identificar una territorialidad étnico-cultural diferenciada. En ese sentido, las posibles afectaciones del proyecto no se dirigieron a un sujeto colectivo étnico preexistente ni impactaron directamente elementos como prácticas culturales, usos y costumbres o derechos territoriales específicos, lo que impide aplicar los criterios de afectación directa definidos por la jurisprudencia constitucional, lo cual es elemento suficiente para desestimar apreciaciones como:

Además, la Resolución ignora los impactos acumulados de décadas de actividad extractiva en la zona: contaminación de fuentes hídricas, desplazamiento de fauna, pérdida de biodiversidad, conflictos sociales, desconfianza institucional, criminalización del liderazgo afro y afectaciones profundas a la autonomía comunitaria.

Dado que cuando el proyecto inicio sus trámites en 2017, no existía una comunidad étnica que habitara el área de influencia del proyecto, dado que el consejo comunitario se funda apenas en el año 2022 y en el año 2023 se inició el proceso de debida diligencia mediante el radicado **2023-1-004044-080261 ID 221997** del 25 de octubre de 2023, por lo cual, se desestima la situación de impactos pasados que deban ser analizados.

- **ESPIRITUAL Y CULTURAL**

“Las familias que actualmente conforman el consejo comunitario Afroverde formaron parte de procesos organizativos con características veredales, sin embargo, debido a la invisibilización percibida y la falta de participación en iniciativas de las veredas, se empezó un proceso de revitalización étnica que desembocó en la conformación de consejo comunitario. En este entendido, es posible identificar que la comunidad comparte su territorio con las veredas y sus habitantes (colonos y campesinos), entrando en una suerte de disputa con estos por el



Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

acceso a una oferta laboral o demás iniciativas presentes en la zona. No se puede, entonces, hablar de un territorio exclusivo de uso exclusivo del consejo comunitario. A eso se aúna que las familias que hoy conforman el consejo, no solo han convivido con el proyecto por más de 15 años, si no que han participado del mismo siendo empleados de la empresa o beneficiarios de los proyectos de responsabilidad social, evidenciando una relación con la empresa que no se ha visto mediada históricamente por el enfoque diferencial, pues fue solo a partir de 2022 que se inició el proceso organizativo y empezó una reivindicación étnica que, en palabras de los mismos comuneros, ha empezado a afianzarse en el último año.

(...)

En la misma línea, el proyecto no tiene la posibilidad, ni la capacidad, de alterar o interferir en los elementos definitorios identitarios o culturales del sujeto colectivo, esto se logra entrever en el sentido que, en el año 2022, luego de más de diez años de ejecución del proyecto, las familias decidieron formar un consejo comunitario que han venido sosteniendo hasta la fecha y que no ha dependido de la empresa o el proyecto mismo. Igualmente, la movilidad y el tránsito de la comunidad se mantiene sin alteraciones mayores y se sigue realizando a través de la vía o de los cuerpos de agua, los cuales, a su vez, son usados por colonos y campesinos de la zona y demás personas que lo requieran.”

Ahora bien, conforme a los criterios establecidos por la Corte Constitucional, es necesario señalar que el Proyecto no ha interferido ni ha generado transformaciones sustanciales en las prácticas culturales del colectivo en cuestión. Las manifestaciones culturales, sociales y comunitarias de las familias que hoy integran el Consejo Comunitario Afroverde se han desarrollado de manera autónoma, sin que exista evidencia de que el POA haya impactado negativamente sus costumbres, saberes tradicionales, formas de organización comunitaria o sus dinámicas simbólicas asociadas al territorio.

5.2.2. SOBRE LA PRESENCIA FÍSICA DEL CONSEJO COMUNITARIO AFROVERDE

Al respecto, como parte del argumento que presenta usted como recurrente esta Autoridad se permite primero aclarar que, en el marco de las competencias del Decreto 2353 del 2019 **se suprimió la función de certificación de presencia de comunidades étnicas para un proyecto, obra o actividad**. El Decreto en mención, de acuerdo con el criterio de afectación directa, y con fundamento en los estudios jurídicos, cartográficos, geográficos o espaciales que se requieran, determina la procedencia y oportunidad de la consulta previa para la adopción de medidas administrativas y legislativas y la ejecución de los proyectos, obras o actividades.

Al respecto de su solicitud, debemos aclarar que, el análisis de determinación de procedencia y oportunidad de la consulta previa, no se puede predicar sobre la presencia de un colectivo étnico en el área de influencia de un proyecto. Lo anterior, debido a que esta Subdirección no emite sus actos administrativos en función a los términos de **traslape**, superposición o cercanía con el área del proyecto. Al contrario, el análisis técnico que se realiza para determinar la procedencia o no de la consulta previa con fundamento el concepto de afectación directa.

En consecuencia, con lo expuesto, el análisis sobre la procedencia o no del derecho fundamental a la consulta previa se fundamentó en la identificación de los lugares de asentamiento, las zonas de tránsito y los usos y costumbres de las comunidades étnicas presentes en el área de influencia. Dicho análisis se orientó a determinar posibles impactos sobre las estructuras sociales, culturales, económicas, territoriales y espirituales de dichas comunidades, derivados de la implementación de una medida o intervención.

Todo lo anterior se evaluó con base en el criterio de afectación directa, entendido como el elemento central que define la activación del mecanismo de consulta previa, conforme a lo establecido por la jurisprudencia constitucional. Este criterio fue aplicado teniendo en cuenta



Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

los componentes mencionados, con el fin de establecer si existía o no una incidencia real y diferenciada sobre los derechos colectivos del **CONSEJO COMUNITARIO AFROVERDE**.

En ese sentido, en lo que corresponde a esta subdirección es importante aclararle a la comunidad recurrente que el método empleado durante la visita de campo realizada entre el 17 y el 19 de octubre de 2024, va en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-123 de 15 de noviembre de 2018 y con lo establecido en las Directivas Presidenciales N° 1 de 2010; N° 10 del 07 de noviembre de 2013 modificada por la Directiva Presidencial N° 08 de 2020, como guías procedimentales en el proceso de determinación de la consulta previa.

Considerando esa información, es cierto que los funcionarios del Ministerio *recogieron testimonios, participaron en talleres comunitarios, caminaron con los mayores los caminos tradicionales y presenciaron directamente las viviendas, cultivos, fuentes de agua y espacios de uso ritual dentro del polígono del proyecto petrolero*. No obstante, esa información por sí sola no es materia concluyente de una afectación directa.

Es evidente, que todo aquello que entregó la comunidad recurrente en el ejercicio de verificación fue debidamente analizada. Así como también, se revisaron de bases de datos cartográficas, etnológicas e información secundaria, siendo éste el procedimiento de análisis que permite emitir un concepto técnico adecuado.

Por lo tanto, se desestima su argumento respecto a una supuesta invalidez o insuficiencia en el análisis de la información recolectada en campo. En el informe quedó debidamente documentado el desarrollo del ejercicio técnico, incluyendo las entrevistas realizadas, la identificación de puntos de interés, así como el análisis jurisprudencial y técnico llevado a cabo por esta Autoridad. Todo ello evidencia que el proceso se adelantó con el rigor metodológico y el sustento normativo requerido.

Adicional, es de aclarar que los 45 puntos de interés entregados por el consejo comunitario fueron trabajados directamente por la comunidad y en los mismos se relacionan son únicamente viviendas, parcelas, lotes, solares, predios, dado que la misma comunidad consideró:

“Es de anotar que, tal y como se expuso previamente, los puntos que se presentan a continuación no fueron recolectados de manera directa por el equipo profesional de la DANCP, pues en la visita que se realizó en el mes de agosto de 2024 (primer intento de visita que no se pudo realizar por razones ajenas a la comunidad, ejecutor y DANCP) la junta de gobierno del consejo, así como varios líderes y lideresas manifestaron que ellos ya habían realizado un ejercicio de georeferenciación con apoyo del ejecutor AMERISUR y que dicho proceso condensaba los puntos de interés e importancia para AFROVERDE, los cuales no habían sufrido cambios, en tanto sería repetitivo e innecesario hacer un nuevo recorrido y se deberían usar los puntos previamente recolectados por la comunidad. Esta situación fue informada a la asamblea durante la visita realizada en el mes de octubre de 2024 y fue ratificada por este órgano decisorio.”

En este entendido, no es posible que hoy el mismo recurrente que fue la persona misma quien allegó los puntos a hacer analizados y no permitió que el grupo de trabajo realizara los recorridos correspondientes, alegue la falta de análisis de puntos de interés como fuentes de agua, caminos ancestrales y zonas para rituales de sanación, armonización, plantas medicinales y encuentros colectivo, dado que el análisis realizado por esta Autoridad se basó en la información que permitió la comunidad se recogida.

Así las cosas, el análisis se basó en la información que la comunidad como autoridad en su territorio, autónoma y que por medio de sus instituciones de gobierno decidió brindar, a pesar

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

de los múltiples intentos de la visita en territorio por parte de los funcionarios de la DANCP, por lo que, cualquier argumento en contra del análisis ahora realizado sobre la misma se desvirtúa por la misma decisión inicial de la comunidad étnica.

5.2.2 SOBRE EL VALOR DE ELEMENTOS ENTREGADOS POR LA EMPRESA

No es cierto que esta Autoridad haya priorizando los informes cartográficos de la empresa proponente. Tal y como se expuso en el acto administrativo como en este escrito, para realizar el análisis técnico, social y jurídico de procedencia, se debe tener en cuenta la información del ejecutor del proyecto, es él quien conoce del desarrollo de sus actividades, quien determina los impactos asociados a las mismas, además, es el ejecutor es quien conoce las condiciones, circunstancias, articulado y territorio en donde se desarrollará el proyecto o medida sujeta a análisis.

No obstante, dicha información constituye únicamente una de las múltiples fuentes que nutren el análisis integral realizado por esta Entidad. Contamos con procedimientos establecidos para la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa, y el acto administrativo emitido se ha llevado a cabo de manera responsable y diligente. En él se analizan detalladamente, uno a uno, los puntos de interés y las prácticas desarrolladas en estos por el **CONSEJO COMUNITARIO AFROVERDE**.

Es de recordar que, frente a los puntos de interés, como se explicó previamente fue la misma comunidad quien allegó la información de los puntos, no permitiendo hacer recorridos en campo a pesar de múltiples intentos por parte de esta Autoridad.

Adicional, es necesario esta Autoridad recibió información de la empresa sobre características del proyecto e impactos asociados hasta antes de iniciar la visita de verificación y que una vez iniciada la visita de verificación hasta la expedición del acto administrativo toda la información recolectada en el expediente fue la suministrada por la comunidad étnica.

Dicho eso, no es cierto que no se tuvieron en cuenta en el análisis técnico, lo recaudado en campo, pues, para esta Autoridad es claro que toda la información que se recolecte en la visita forma parte integral del estudio del caso, tal como se puede evidenciar en la motivación y desarrollo del acto administrativo.

Por último, es de aclarar que esta Autoridad es la competente para realizar los análisis de afectación directa y que la opinión o posición de la empresa en nada influye en los análisis técnicos, cartográficos, geográficos, sociales y culturales realizados, por lo cual, la decisión de la inexistencia de una afectación directa responde exclusivamente a la información que logró ser recopilada a lo largo del trámite.

5.2.3 SOBRE LOS IMPACTOS ACUMULADOS.

Sobre este acápite, no resulta procedente considerar que cualquier percepción subjetiva de la comunidad recurrente sobre las actividades del proyecto deba interpretarse automáticamente como una posible afectación. Esto es especialmente válido cuando esta Entidad, en el ejercicio de sus competencias y conforme a los lineamientos establecidos en la normatividad y jurisprudencia vigentes, ha expedido el acto administrativo de manera responsable y diligente, sin vulnerar ni restringir los derechos señalados por el recurrente. Para tal efecto, se efectuó un análisis exhaustivo y minucioso, abordando cada uno de los intereses y prácticas desarrolladas en el territorio por el **CONSEJO COMUNITARIO AFROVERDE**, garantizando así una evaluación integral y fundamentada.

En ese entendido, esta subdirección a pesar de conocer información sobre procesos ajenos a su materia no puede en ningún momento considerar estos como elementos decisorios para emitir un concepto de procedencia, porque como lo ha mencionado el mismo recurrente, en

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

lo relacionado con la afectación directa y el derecho a la consulta previa la Corte en sentencia SU-123 de 2018 sistematizó los criterios jurisprudenciales sobre la naturaleza del caso.

En tal sentido, al encontrar que no existían elementos suficientes que permitiesen considerar una posible afectación directa, ya sea **con impactos positivos o negativos** a la comunidad étnica por el desarrollo del proyecto, sería incorrecto e improcedente por parte de esta Autoridad aseverar algo distinto a lo evidenciado en campo respecto de la historia, cultura, economía, labores diarias, zonas de tránsito, los puntos georreferenciados y demás particularidades de la comunidad, así como las características técnicas y coordenadas relacionadas y entregadas por el solicitante.

Es de recordar que la comunidad étnica nace apenas en el año 2022, que ya había pasado un tiempo desde que el proyecto inicio operaciones y que, en ese entendido, no es posible que la comunidad alegue que fue afectada por actividades que se realizaban antes de su creación.

Ahora bien, frente a impactos que la comunidad relaciona hoy en el recurso existencia como: *“El paso de maquinaria, los derrames, la modificación del paisaje sonoro y visual, y el cierre o militarización de caminos rompen ese equilibrio espiritual. Esto no es un argumento simbólico: es un daño cultural concreto, que según la Corte Constitucional (T-769/09, SU383/03), equivale a una forma de desplazamiento espiritual y simbólico.”* Es de recordar, que durante la visita de verificación que fue el momento para verificar en territorio la existencia de dichos impactos, la comunidad no permitió a los delegados de la DANCP el recorrido en territorio, no mostró o allegó material probatorio que permitiera generar siquiera duda de la materialización o existencia de dichos impactos y hoy en sede de recursos, no allega tampoco prueba siquiera sumaria que permita inferir la existencia de alguno de los impactos referidos.

Frente a lo anterior, la Corte Constitucional en sentencia T-470 de 2024, estableció que la afectación directa no es un elemento que su sola enunciación genere deberes del estado o particulares, dado que es necesaria una razonable y concreta de la misma, situación que no pudo ser presentada en el trámite de expedición de la resolución recurrida.

5.2.4 SOBRE EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN

Es importante mencionar que, cada una de las partes involucradas en estos procesos tienen todas herramientas procesales y judiciales que permite a las partes de un proceso impugnar una decisión para que un nuevo análisis se revoque o modifique, por haber considerado que la decisión fue errónea o perjudicial.

En consecuencia, y con plena certeza derivada del exhaustivo análisis realizado por esta Autoridad, no resulta procedente aplicar el principio de precaución en este caso, pues no existe duda razonable ni elementos probatorios suficientes que permitan inferir la existencia de una posible afectación directa ya sea positiva o negativa, sobre la comunidad étnica en relación con el desarrollo del proyecto.

Por consiguiente, sería erróneo e improcedente que esta Autoridad emitiera una conclusión contraria a la evidenciada en el trabajo de campo, que abarcó de manera integral la historia, cultura, economía, actividades cotidianas, zonas de tránsito, puntos georreferenciados y demás particularidades propias de la comunidad, así como las especificaciones técnicas y coordenadas proporcionadas por el solicitante. Todo lo anterior se sustenta en una valoración técnica rigurosa y objetiva que descarta cualquier afectación directa al grupo étnico en cuestión.

Por las razones expuestas, esta entidad considera que obró de conformidad con los parámetros legales y jurisprudenciales en materia de consulta previa y fue contundente al determinar que el proceso en mención estuvo mediado de un riguroso análisis técnico **en el**

Continuación resolución “Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025.”

cual no se identificaron posibles afectaciones sobre el Consejo Comunitario Afroverde, por parte del proyecto.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Subdirección Técnica de Consulta Previa,

RESUELVE:

PRIMERO. No reponer y, en consecuencia, **Confirmar** en todas sus partes la Resolución No. ST – 0999 de 14 de julio de 2025 *“Sobre la procedencia de la consulta previa con comunidades étnicas para proyectos, obras o actividades”*.

SEGUNDO. Conceder el recurso de apelación ante la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa.

TERCERO. Notifíquese a la parte recurrente en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALFONSO ENRIQUE JIMÉNEZ ECHEVERRÍA
Subdirector Técnico de Consulta Previa

Elaboró: Alicianna Paba. Abogada contratista Grupo de Actuaciones Administrativas de Procedencia de Consulta Previa.	Revisó: Simón Latorre–Coordinador - Grupo de Actuaciones Administrativas de Procedencia de Consulta Previa.
Aprobó: Alfonso Jiménez Echevarría – Subdirector Técnico de la DANCP.	